

Auto interlocutorio	539
Radicado	05266-31-03-001-2021-00307-00
Procedimiento	Aprehensión Garantía Mobiliaria
Solicitante	Bancolombia S.A.
Propietario	Jorge Esteban Franco Cardona
Asunto	Declara falta de competencia

**JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
ENVIGADO**

Veintisiete de octubre de dos mil veintiuno

Se procede a definir la competencia para conocer de la solicitud de aprehensión que presenta **Bancolombia S.A.** contra el señor **Jorge Esteban Franco Cardona**.

I. ANTECEDENTES

1. El 15 de septiembre del 2021, el apoderado judicial de Bancolombia S.A., presentó en la Oficina Judicial de Medellín, solicitud de aprehensión de la garantía mobiliaria de los vehículos identificados con placas ESP339 y ESP334, la cual por reparto le correspondió su conocimiento al Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad.

2. Mediante providencia del 20 de septiembre del 2021, el homólogo inadmitió la solicitud y una vez subsanada, por auto del 8 de octubre pasado, la misma fue rechazada, por considerar, que no tiene competencia territorial, dado que, conforme al numeral 7 del artículo 17 del C. G del P., el juez competente para conocer la solicitud de aprehensión y entrega, es el juez del lugar o sitio donde se encuentren ubicados los bienes objeto de aprehensión y en el caso de estudio, conforme a los certificados de la Secretaría de Tránsito, los mismos se encuentran inscritos en Envigado.

II. CONSIDERACIONES

1. De antaño se ha entendido la competencia como la reglamentación del ejercicio de la jurisdicción, en razón de ello es que se ha considerado por la doctrina nacional, que ésta es la facultad que cada juez tiene para ejercer jurisdicción en determinados asuntos, respecto de determinados sujetos, en una cuantía y en un territorio determinado¹.

Sumado a lo anterior, la competencia debe entenderse no sólo como la distribución del ejercicio de la función jurisdicción, sino, como un elemento estructural del derecho al debido proceso, véase que el artículo 29 de la Constitución Política, señala que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, **ante juez o tribunal competente** y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

Ello sin mencionar, que también, la competencia, es uno de los presupuestos procesales de la acción - así lo ha entendido la doctrina nacional².

Teniendo entonces dichos puntos de partida, es que se tiene que las reglas que determinan la competencia y en general aquellas que atañen al derecho procesal, son de orden público, y por ende, de obligatoria observancia, tanto para particulares como para funcionarios.

Véase que el mismo artículo 13 del C. G. del Proceso, ratifica el anterior enunciado, al señalar expresamente: *“las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley”*, y concluye señalando en su inciso final, que: *“las estipulaciones de las partes que contradigan lo dispuesto en este artículo se tendrán por no escritas”*.

¹ Véase, Luis Alonso Rico Puerta, Teoría General del Proceso, Pág. 355, Editorial Leyer, 2013, Bogotá.

² Véase, Op. Cit, pág., 499.

2. Respecto a la competencia territorial para conocer de las Solicitudes de Aprensión de Garantías Mobiliarias, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, al resolver sendos conflictos de competencia, arguye que pese a que dichas solicitudes de aprehensión no sean un proceso propiamente dicho, ni cuentan con una asignación de competencia determinada en la ley, por virtud de la analogía consagrada en el artículo 12 del C. G del P., a este tipo de solicitudes de aprehensión deben aplicárseles, como criterio para establecer la competencia territorial, el numeral 7º del artículo 28 *ibídem*, como quiera que es la norma más afín:

“En los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, será competente, de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes (...)” .

Por tanto, cuando de solicitud de aprensión de garantía mobiliaria se trate, la competencia es privativa del lugar de donde se encuentre ubicado el bien.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, mediante auto AC747-2018 del 26 de febrero del 2018, en caso similar al que hoy es objeto de estudio, manifestó lo siguiente:

“Hasta este punto queda despejado que el procedimiento de “aprehensión y entrega del bien” está asignado al funcionario civil del orden municipal, pero quedando en margen de duda si para el efecto prima la regla de derechos reales o la indicada en caso de que “diligencias especiales”, sin que encaje el supuesto en forma exacta en alguna de ellas, por lo que, para colmar tal vacío es preciso acudir a situaciones análogas, en virtud del artículo 12 del Código General del Proceso.

En ese laborario fluye que el contexto más próximo y parecido al que regulan los artículos 57 y 60 de la ley 1676 de 2013, es el previsto en el

numeral 7 del artículo 28 del Código General del Proceso, en tanto allí se instituye, se itera, el criterio según el cual la asignación se determina por la ubicación de los bienes, cuando la acción abrigue derechos reales.

En consecuencia, las diligencias de este linaje se atribuyen a los Juzgados Civiles Municipales o Promiscuos Municipales, según sea el caso, de donde estén los muebles garantizadores del cumplimiento de la obligación, lo que no siempre coincide con el lugar donde aquellos se encuentren escritos, toda vez que esa formalidad se define en el artículo 2 de la ley 769 del 2002 como un procedimiento destinado al registro inicial de un vehículo (...); sin que necesariamente conlleve sujeción material o jurídica del vehículo a ese lugar, tanto más si este por su naturaleza puede circular libremente en todo el territorio nacional.

*Expresado de otro modo, el sitio donde este matriculado un rodante no obligatoriamente debe concordar con el de su locomoción, por lo que es éste y no aquel, el que fija la asignación competencial*³.(Negrillas intencionales).

3. Interpretación que se comparte totalmente, toda vez que, si se mira la finalidad de la solicitud de aprehensión de garantía mobiliaria, dentro del procedimiento de pago directo, no es otra que el acreedor pueda satisfacer, por medio de la garantía otorgada, el pago de la obligación, mediante un trámite ágil y efectivo, por tanto, es muy coherente que se regule como factor de competencia el lugar donde se encuentre el bien, toda vez que se haría más ágil la aprehensión para satisfacer las obligaciones contraídas.

4. Ahora, en el caso de marras, se vislumbra que el solicitante en su escrito indica que presume que los vehículos objeto de aprehensión se encuentran ubicados o transitando en la Carrera 29 N° 42-21 de la ciudad de Medellín,

³ Corte Suprema de Justicia AC529-2018. Febrero 12 de 2018.
Véase también AC6494-2017 octubre 2 de 2017

razón por la cual, no se comparte la decisión del homólogo, pues la parte solicitante es clara en indicar que el lugar donde cree que circulan los bienes es aquella ciudad, aunado a que dirige la solicitud para los jueces de esa ciudad, por tanto, es clara su intención de que la diligencia sea conocida en ese municipio.

5. De otro lado, con respecto a la competencia de esta clase de solicitudes, es preciso advertir que se considera que los juzgados civiles del circuito no son competentes para tramitar solicitudes de aprehensión de garantías mobiliarias, pues éstas, no son un proceso, sino una simple solicitud, la cual, se debe mirar conforme la regla estipulada en el numeral 7 del artículo 17 del C.G del P., que en su literal consagra:

“Competencia de los jueces municipales en única instancia:

(...) 7. De todos los requerimientos y diligencias varias, sin consideración a la calidad de las personas interesada”.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, expresó:

“(...) Para esa finalidad, en su artículo 60 parágrafo segundo previó que «[s]i no se realizare la entrega voluntaria de los bienes en poder del garante objeto de la garantía, el acreedor garantizado podrá solicitar a la autoridad jurisdiccional competente que libre orden de aprehensión y entrega del bien, con la simple petición del acreedor garantizado», lo que corresponde armonizar con el artículo 57 ejusdem, según el cual «[p]ara los efectos de esta ley, la autoridad jurisdiccional será el Juez Civil competente» y el numeral 7 del artículo 17 del Código General del Proceso según el cual los Jueces Civiles Municipales conocen en única instancia de «todos los requerimientos y diligencias varias, sin consideración a la calidad de las personas interesadas».

Hasta este punto queda despejado que el procedimiento de «aprehensión y entrega del bien» está asignado al funcionario civil del orden municipal,

pero quedando un margen de duda si para el efecto prima la regla de ejercicio de derechos reales o la indicada en caso de que «diligencias especiales», sin que encaje el supuesto en forma exacta en alguna de ellas, por lo que, para colmar tal vacío es preciso acudir a situaciones análogas, en virtud del artículo 12 del Código General del Proceso⁴» (Negrillas intencionales).

6. Así las cosas, corresponde el conocimiento de la citada causa, al Juez Civil Municipal de Medellín, puesto que el juez de categoría municipal, es el competente para conocer de solicitudes cuando de aprehensión de garantía mobiliaria se trate, y, es allá, el lugar donde denunció el solicitante que circulan los bienes muebles identificados con placas ESP339 y ESP334, objeto de estudio.

Procede, entonces, ordenar la remisión del expediente virtual a quien es competente y no rechazar la demanda, como erradamente lo consagra el art. 90 *ídem*⁵.

En razón de lo expuesto, se

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar la falta de competencia para conocer la solicitud de Aprehensión de Garantía Mobiliaria instaurada por **Bancolombia S.A.** contra el señor **Jorge Esteban Franco Cardona**.

SEGUNDO: Disponer su remisión a la Oficina Judicial de Medellín, para que proceda a su reparto entre los Juzgados Civiles Municipales de Oralidad.

⁴ AC747-2018, Radicación n° 11001-02-03-000-2018-00320-00 del 26 de febrero del 2018.

⁵ Se inaplica en este caso este precepto por inconstitucional, para lo cual nos remitimos a lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C-807 del 2009.

AUTO INTERLOCUTORIO 539 - RADICADO 2021-00307
NOTIFÍQUESE



GERMÁN ALONSO FLOREZ HINCAPIÉ
JUEZ

CERTIFICO

15

Que el auto anterior fue notificado en estado No.142, fijado hoy en la Secretaría del Juzgado, a las 8 a.m.

Envigado, 04 NOVIEMBRE 2021

Tatiana Corrales Ramírez
Secretaria